

FOJA: 23 .-Veintitrés .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5640-2023
CARATULADO : SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E
INTÉRPRETES MUSICALES/KELE S.A.

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Al folio 1, comparece Sergio Antonio Vitali Naranjo, abogado, domiciliado en calle Doctor Sótero Del Río N° 326, oficina 1305, comuna de Santiago, en representación de la **Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD)**, entidad de Gestión Colectiva de Derechos Intelectuales, representada por su Director General, don Juan Antonio Durán González, ingeniero civil, ambos domiciliados en calle Condell N°346, comuna de Providencia, quien interpone demanda en juicio sumario de cumplimiento de contrato, con indemnización de perjuicios, en contra de **KELE S.A.**, del giro de su denominación, representada individual e indistintamente por don Alberto Enrique Francisco Agostini Garibotto o doña Daniela Cecchi, comerciantes, todos domiciliados en calle Constitución N°40, Local 57, comuna de Providencia.

Fundamentando su demanda, señala que la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, es una entidad de gestión colectiva que cuenta con la autorización de funcionamiento a que se refieren los artículos 91 y siguientes de la Ley N°17.336.

Indica que SCD está autorizada para realizar la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y demás titulares de derechos que representa, tanto nacionales y extranjeros, para la administración del derecho de comunicación pública de las obras musicales, con o sin texto, sincronizados o no en obras audiovisuales, teatrales y coreográficas, que constituyen el repertorio de SCD.



Relata que la demandada obtuvo de la actora, para el local público denominado “Restaurant Pizzeria Back Stage”, la autorización para ejecutar públicamente obras musicales del repertorio que SCD representa, la que se otorgó mediante el contrato de autorización de ejecución Pública de Obras Musicales y Anexo C-Nº47561, de fecha 16 de marzo del 2007, en los cuales el demandado se obligó a pagar dentro de los diez primeros días del mes siguiente, a contar del 1 de enero del 2007, la tarifa mensual de 1.60 Unidades Musicales Mensuales, más un 50% de derechos conexos, fijándose \$15.878 el valor de la UMM a la fecha del contrato, estableciéndose que este monto se reajustaría los días 1º de enero, 1º de mayo y 1º de septiembre de cada año, según el IPC en los cuatro meses anteriores, comenzando a regir el mes siguiente.

Señala que el valor actual a la fecha de presentación de la demanda de la unidad musical es de \$27.103, y que la tarifa pactada corresponde a la tarifa especial acordada en el Convenio suscrito entre la demandante y la Federación Gremial de la Industria Hotelera y Gastronómica de Chile.

Expone que la demandada a partir del 1 de noviembre del 2019, no ha pagado la tarifa pactada, ni ha dado cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en el contrato y anexo C-Nº47561, por lo que solicita se le condene al pago de la tarifa mensual pactada señalada anteriormente, respecto del período comprendido entre el 1º de noviembre del 2019 al 31 de marzo del 2023 y desde el 1º de abril de 2023 hasta el término del juicio.

Afirma que la demandada debe cancelar a la demandante, a título de evaluación anticipada de los perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones reajustables, a contar del décimo día del mes siguiente a cada mes adeudado hasta su pago efectivo.

Solicita se condene a la parte demandada a pagar el máximo de la multa establecida en el artículo 78 de la Ley Nº 17.336, ya que el no pago de la remuneración que en este acto se demanda constituye una infracción a los artículos 21 y 67 de la Ley Nº 17.336.



Por lo que previa cita de disposiciones legales, solicita se sirva tener por interpuesta demanda en juicio sumario de cumplimiento de contrato, con indemnización de perjuicios, en contra de KELE S.A., representada por don Alberto Enrique Francisco Agostini Garibotto o doña Daniela Cecchi, ya individualizados, y en definitiva condenar al demandado a pagar a la actora la tarifa mensual pactada de 1.60 U.M.M, más 50% de derechos de conexos, respecto del período comprendido entre los meses de noviembre del 2019 y marzo del 2023, ambos inclusive; pagar a la demandante la dicha tarifa por el período comprendido entre el 1 de abril del 2023 en adelante y hasta el término del juicio; pagar a título de indemnización de perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones reajustables, contado desde el décimo día del mes siguiente a cada período mensual adeudado hasta su pago efectivo; pagar una multa de UTM 50, prevista en el artículo 78 de la Ley N° 17.336, o la que el tribunal fije; en subsidio, lo se sirva determinar, conforme a derecho; más las costas de la causa; todo según los montos que se liquiden en la etapa del cumplimiento del fallo o, a expresa solicitud de parte, en la etapa procesal pertinente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 85 K de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Al folio 6, consta notificación personal a don Alberto Enrique Francisco Agostini Garibotto, en representación de KELE S.A., el día 19 de abril de 2023.

Al folio 9, se efectuó la audiencia de contestación y conciliación, con la asistencia del apoderado de la parte demandante y del apoderado de la parte demandada, quien contestó la demanda mediante minuta agregada al folio 8 de autos, que se tuvo como parte integrante de la audiencia.

Señala que en el libelo pretensor se ha interpuesto en su contra una demanda de "cobro de pesos", correspondiente a tarifas supuestamente devengadas en favor del demandante y, por otra parte, una demanda de perjuicios por supuestas infracciones a la Ley sobre Propiedad Intelectual.



En cuanto a la demanda de cobro de pesos, señala que es improcedente demandar conforme a las normas del procedimiento sumario como si se tratara de un cobro de honorarios, toda vez que los honorarios son la retribución a los servicios prestados por los profesionales liberales, y no para el cobro de tarifas, alegando que esto vicia de nulidad la demanda interpuesta y acarrea la incompetencia del tribunal en razón de la materia.

Refiere que opone a la demanda de cobro de tarifas la excepción de "falta de legitimidad pasiva", atendido que en la demanda se cobran a su parte tarifas supuestamente devengadas entre los años 2019 y la actualidad, encontrándose la demandada exonerada de pagar las tarifas correspondientes al denominado estallido social y posteriormente al periodo del estado de excepción por emergencia sanitaria que afectó al país.

Afirma que durante dicho período, la demandada, cuyo rubro es el de restaurant, no pudo funcionar por la emergencia sanitaria que afectaba al país y la consiguiente prohibición de atender público, lo cual es de público conocimiento, encontrándose exonerada de pagar tales tarifas por razones de "fuerza mayor", siéndole la demanda interpuesta de esa suerte inoponible e inexigible.

Agrega que lo anterior es aplicable respecto de las infracciones supuestamente incurridas por la demandada, oponiendo la excepción de nulidad por "falta de causa", toda vez que por la emergencia sanitaria que afectó al país y el giro de la empresa demandada, ésta no ha incurrido en las infracciones demandadas.

Agrega que tampoco se especifican en la demanda las obras, autores, fechas, horas en que se habrían cometido tales infracciones, lo cual acarrea la nulidad de la demanda interpuesta por carecer de los fundamentos de hecho que requiere el Artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Opone la excepción de falta de legitimación activa, por cuanto tampoco consta que la demandante cuente efectivamente con la representación de los supuestos autores a los cuales tampoco se



individualiza, lo que vicia de nulidad la demanda por falta de personería y representación de los supuestos autores defraudados.

Por lo que solicita tener por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y acogerlas, en definitiva, rechazando la demanda por improcedente y no encontrarse ajustada a derecho.

Al folio 9, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

Al folio 11, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Al folio 26, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

PRIMERO: Que en primer lugar, previo a abordar el fondo de la acción deducida, resulta menester atender las alegaciones de la parte demandada de autos referidas a la incompetencia del tribunal que, si bien no fueron opuestas como excepción, por su propia naturaleza deben entenderse como tales, las cuales fueron deducidas por la demandada esgrimiendo que se ha interpuesto en su contra una demanda de "cobro de pesos", y que sería improcedente demandar conforme a las normas del procedimiento sumario como si se tratara de un cobro de honorarios y no un cobro de tarifas, lo que acarrea la incompetencia del tribunal en razón de la materia.

SEGUNDO: Que para una adecuada resolución del asunto, es necesario precisar que la competencia se encuentra definida en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, entendiéndose ésta como "*la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones*".

TERCERO: Que en la especie y conforme al mérito de los antecedentes, en primer lugar, se advierte que la acción deducida en el libelo pretensor corresponde a una demanda en juicio sumario de cumplimiento de contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales, con indemnización de perjuicios, no siendo efectiva



la alegación de la demandada referida a que el libelo pretensor contiene además una demanda de cobro de pesos en su contra.

CUARTO: Que en este sentido, siendo la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios materia propia de un juicio declarativo que debe necesariamente ser resuelto en sede civil, por lo que este tribunal resulta del todo competente para conocer del presente pleito, habrá de tenerse por desestimada la excepción en análisis.

II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

QUINTO: Que en su escrito de contestación, la demandada opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, alegando que su parte se encuentra exonerada de pagar las tarifas correspondientes al denominado estallido social y posteriormente al periodo del estado de excepción por emergencia sanitaria durante el cual no pudo funcionar por la consiguiente prohibición de atender público, siéndole la demanda interpuesta inoponible e inexigible, por razones de "fuerza mayor".

SEXTO: Que respecto a la excepción incoada, cabe hacer presente que la legitimación es el primer elemento que el juez debe considerar al examinar si concurren las condiciones que hacen procedente la acción deducida en un caso concreto, en virtud del axioma que señala "no hay acción, si no hay legitimación", y de ser así, el tribunal no puede otorgar la tutela jurisdiccional solicitada.

En este mismo sentido, cabe señalar que en términos generales, la legitimación constituye un presupuesto de eficacia de todo acto jurídico, siendo definida como "*el reconocimiento que hace el derecho a una persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico, derivando dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el sujeto y el objeto del mismo.*" (Romero Seguel Alejandro, citando a Juan Ladaria. "Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Primera edición. Pág. 87).



Cabe consignar que *“la legitimación procesal es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso. La sola capacidad procesal no basta para formular una pretensión y para oponerse a ella en un proceso, sino que es necesaria una condición más precisa y específica referida al litigio mismo.*

(...) Con ella se expresa que para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere la identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva)” (Corte Suprema, causa Rol C-64.310-2016)

SÉPTIMO: Que como se viene razonando, la legitimación pasiva es la cualidad que debe tener el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que, conforme a la ley sustancial, está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer en su contra; por lo que constituye un presupuesto de la acción de carácter sustancial, necesario para la existencia de un pronunciamiento judicial respecto del fondo del asunto, que es de carácter objetivo, puesto que se basa en la posición de una parte respecto del objeto material del acto (Corte Suprema, Rol N° 82.575-2021, considerando octavo).

OCTAVO: Que primeramente cabe dejar asentado que los argumentos efectivos en los que basa la demandada su excepción, no dicen relación alguna con la naturaleza de la excepción de falta de legitimación pasiva que supuestamente le afectaría, toda vez que alega a su favor encontrarse exonerada del pago de las tarifas por fuerza mayor, argumentos todos que dicen relación con el fondo de la acción deducida, esto es, la responsabilidad que le cabría en un



posible incumplimiento contractual, motivos por los cuales habrá de tenerse por rechazada la excepción en estudio.

III. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA:

NOVENO: Que en su escrito de contestación, la demandada opuso la excepción de falta de legitimación activa, alegando que no le consta que la demandante cuente efectivamente con la representación de los supuestos autores, a los cuales tampoco individualiza, lo que vicia de nulidad la demanda interpuesta por improcedente por falta de personería y representación de los supuestos autores defraudados.

DÉCIMO: Que de conformidad a lo razonado en el considerando sexto de esta sentencia, la legitimación activa corresponde a la facultad de quién se cree favorecido por la ley para requerir la intervención del órgano jurisdiccional ante una situación de hecho amparada por una norma legal, y que de no ser declarada le irrogaría un perjuicio, por regla general, de carácter patrimonial, por lo que relaciona necesariamente con quienes son titulares para reclamar la acción de indemnización de perjuicios, a fin de poder determinar si ésta resulta procedente.

De esta forma, la falta de legitimidad activa se produce cuando no existe identidad entre la persona del compareciente y aquella a quien legalmente la acción está concedida, debiendo en tal caso rechazarse la demanda, no por que ésta haya sido mal deducida, sino porque ésta no corresponde al actor.

UNDÉCIMO: Que no se encuentra controvertido en autos, el hecho que las partes suscribieron un contrato de autorización de ejecución pública de obras y fonogramas musicales, mediante el cual la demandada solicitó a la actora autorización para ejecutar públicamente obras y fonogramas musicales del repertorio de la Sociedad Chilena De Autores E Intérpretes Musicales y que esta última se la concedió.

A este respecto, cabe considerar que el artículo 91 de la Ley 17.336 dispone expresamente que "*La gestión colectiva de los*



derechos de autor y conexos sólo podrá realizarse por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de este Título”, por lo que se tiene por establecido que la actora cumple con lo dispuesto en el artículo citado, y tiene la legitimación para deducir la acción de autos.

A mayor abundamiento, el demandado confunde los argumentos en sus alegaciones, en cuanto lo que se le reclama en autos es no pagar la tarifa pactada con la demandante, y no se hace referencia a defraudar autores como menciona al momento de oponer la excepción en análisis.

DUODÉCIMO: Que de esta forma, resulta indudable que la parte demandante de autos, en su calidad de parte contratante del referido instrumento y como entidad de Gestión Colectiva de Derechos Intelectuales, se encuentra efectivamente legitimada para accionar mediante la acción de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios incoado en autos, motivo por el que se tendrá por desestimada la excepción de falta de legitimación activa.

III. EN CUANTO AL FONDO:

DECIMOTERCERO: Que Sergio Antonio Vitali Naranjo, en representación de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, ha interpuesto en esta sede civil demanda en juicio sumario de cumplimiento de contrato, con indemnización de perjuicios, en contra de KELE S.A., solicitando en definitiva condenar al demandado a pagar a la actora la tarifa mensual pactada de 1.60 U.M.M, más 50% de derechos de conexos, respecto del período comprendido entre los meses de noviembre del 2019 y marzo del 2023, ambos inclusive; además de cancelar a la demandante dicha tarifa por el período comprendido entre el 01 de abril del 2023 en adelante y hasta el término del juicio; debiendo pagar a título de indemnización de perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones reajustables, contado desde el décimo día del mes siguiente a cada período mensual adeudado hasta su pago efectivo; pagar una multa de UTM 50, prevista en el artículo 78 de la Ley N°



17.336, o la que US. se sirva fijar; en subsidio, lo que US. se sirva determinar, conforme a derecho; más las costas de la causa.

Basa su demanda en los hechos y fundamentos de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

DECIMOCUARTO: Que la parte demandada contestó la demanda incoada en su contra, alegando la nulidad por "falta de causa", toda vez que debido a la emergencia sanitaria que afectó al país y el giro de la empresa demandada, ésta no ha incurrido en las infracciones demandadas, agregando que además la actora en su libelo no especifica las obras, autores, fechas y horas en que se habrían cometido tales infracciones, lo cual acarrea la nulidad de la demanda.

DECIMOQUINTO: Que para acreditar sus afirmaciones, la parte demandante acompañó prueba documental no objetada de contrario, consistente en los siguientes documentos:

a. Al anexo del folio 3:

1. Copia de Reducción de acta de Asamblea General Extraordinaria de socios de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, reducidos a escritura pública con fecha 17 de abril de 2019, en que consta el texto único y refundido de los estatutos de la misma.

2. Copia de Protocolización de Resolución N° 2.608 del Ministerio de Educación, de fecha 06 de julio de 1994.

b. Al anexo del folio 10:

3. Documento denominado "Contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales" N°47651, de fecha 16 de marzo de 2007, entre la Sociedad Chilena del Derecho del Autor y Kele S.A. otorgando a este último la autorización no exclusiva para ejecutar públicamente las obras de su repertorio para el local Restaurant Pizzería Back Stage, obligándose ésta a pagar mensualmente la tarifa de 1,60 UM que a la fecha del contrato asciende a \$15.878, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, a partir del 01 de enero de



2007. Asimismo el usuario se obliga, además, a entregar junto al pago mensual y en forma fidedigna una nómina de obras ejecutadas en vivo en el establecimiento para los efectos de la distribución de los derechos recaudados, sin estar obligado a entregar información de las obras que se ejecuten en el establecimiento a través de medios mecánicos, lo que será suplido por los sistemas estadísticos de la misma SCD. En la cláusula séptima se pactó que la falta de pago así como el incumplimiento de cualquier obligación del contrato, facultan a SCD para poner término inmediato a la autorización sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo adeudado; estipulándose que las cantidades de dinero debidas por derechos de ejecución, devengarían el interés corriente bancario para operaciones reajustables a contar del décimo día del mes siguiente al mes en que los derechos devengaron. Aparece que el contrato regirá hasta el 31 de diciembre del año en curso prorrogable tácitamente por períodos consecutivos. Se deja presente que la Unidad musical sería reajustada los días 1 de enero, 1 de mayo y 1 de septiembre de cada año, en el mismo porcentaje de variación que experimentase el Índice de Precios al Consumidor en los cuatro meses anteriores. Incluye Declaración Convenio Hotelga. Consta "Anexo al Contrato C N°47561", otorgando autorización al usuario para ejecutar públicamente los fonogramas del repertorio SCD en su establecimiento, por lo cual se obliga a pagar mensualmente una tarifa por concepto de derechos de ejecución pública de fonogramas (derechos conexos) igual al 50% de la tarifa establecida para el derecho de ejecución pública de obras musicales, obligándose a consignar en las planillas de ejecución, mención del nombre del intérprete y la marca del productor del fonograma utilizado.

c. Al anexo del folio 15:

4. Documento que la parte denomina "Jurisprudencia".

d. Al anexo del folio 16:

5. Documento que la parte denomina "Liquidación" en que aparece a nombre de Kele S.A., se indica en columnas de períodos,



autor, conexos, total derechos, e interés, por una suma total de \$4.211.541, con fecha 29 de agosto de 2023.

DECIMOSEXTO: Que a su turno, la parte demandada no allegó prueba alguna a este tribunal para acreditar sus defensas y alegaciones.

DECIMOSÉPTIMO: Que previo a resolver el fondo de la acción deducida, resulta pertinente señalar para una mejor comprensión del fallo, que la causa sometida a conocimiento del Tribunal, se enmarca en el contexto de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, garantizado por nuestra Carta Magna en su numeral 25 del artículo 19°, que previene *“La constitución asegura a todas las personas: La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”*

En segundo lugar, la citada ley en su artículo 1°, se refiere a la naturaleza y objeto de la protección de la propiedad intelectual, señalando *“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su expresión, y los derechos conexos que ella determina (...) El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.”* De este modo, se reafirma en este cuerpo la pretérita voluntad del legislador en cuanto otorgar una protección patrimonial y moral a las diversas obras de la creación humana, en sus más amplias y diversas aristas, ya sea de la obra propiamente tal, como de aquellas situaciones que devengan en forma conexa, y que de la misma forma, se hacen merecedoras de la protección legislativa.

DECIMOCTAVO: Que ahora bien, la calidad de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, se encuentra regulada en el Título V de



dicho cuerpo legal, artículos 91 y siguientes, los cuales la califican como entidad de gestión colectiva, teniendo como objetivo la realización de actividades de administración, protección y cobro de los derechos intelectuales a que se refiere el título mencionado. Estableciéndose, como regla general, en su artículo 100 que dichas entidades *“estarán obligadas a contratar, con quien lo solicite, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos de autor y conexos que administren, de acuerdo con tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio”*; entendiéndose por tal el conjunto de obras que maneja la entidad de gestión colectiva y que, bajo su tutela, administra, protege y efectúa el cobro de los derechos intelectuales procedentes.

DECIMONOVENO: Que relacionando lo anterior con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la ley 17.336, a propósito del derecho patrimonial que se custodia respecto de los autores y creadores de obras de la inteligencia, se indica que sólo el titular del derecho tiene la facultad de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir sus derechos total o parcialmente y de autorizar su utilización por terceros y, a propósito de la controversia tratada en autos, es aplicable el artículo 21 del cuerpo citado, el cual señala, en lo que nos concierne, que quien tenga en explotación un local público en el cual se representen o ejecuten piezas musicales o fonogramas, podrá obtener la autorización que detenta el titular del derecho de autor, a través de la entidad de gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no exclusiva, siendo obligado al pago de la correspondiente remuneración.

VIGÉSIMO: Que por otro lado, el artículo 78 del cuerpo normativo en estudio, establece que: *“Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas expresamente en los artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales”*, en tanto los artículos 79 y siguientes refieren a los delitos contra la propiedad intelectual y sus sanciones.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que asimismo, cabe citar los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, normas que establecen que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, debiendo ejecutarse de buena fe, por lo que obliga no sólo aquello que esté expresamente establecido, sino las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en efecto, el demandante ha deducido la acción de cumplimiento de contrato, con indemnización de perjuicios, fundamentada en el Contrato celebrado entre las partes de autorización de ejecución pública de obras musicales N°47651, y su respectivo Anexo para ejecutar públicamente los fonogramas del repertorio SCD en su establecimiento.

Atendida la naturaleza de la acción interpuesta, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, era carga de la demandante, probar la existencia del contrato cuyo incumplimiento alega, su naturaleza, estipulaciones y modalidades, correspondiendo a su vez a la demandada, acreditar el haber cumplido con dichas obligaciones o la extinción de éstas.

VIGÉSIMO TERCERO: Que del análisis de la prueba rendida, especialmente la copia del contrato suscrito entre las partes de este juicio, el que no ha resultado objetado de contraria y por tanto es ley para los contratantes, ha quedado acreditado que las partes suscribieron dicho contrato con fecha 16 de marzo de 2007, mediante el cual la actora otorgó a la demandada la autorización para ejecutar públicamente las obras y los fonogramas del repertorio SCD para el establecimiento “Restaurant Pizzería Back Stage”, para lo cual se obligó a pagar mensualmente la tarifa de 1.60 U.M.M., dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, y que las cantidades de dinero debidas por concepto de derechos de ejecución devengarían el interés corriente bancario, para operaciones reajustables, a contar del día siguiente del vencimiento y se reajustarían los días 1 de enero, mayo y



septiembre de cada año, más 50% de la tarifa por concepto de derechos conexos.

Además se pactó en la cláusula quinta que la falta de pago de los derechos de ejecución aludidos en las cláusulas anteriores, así como el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, facultaría a la demandante para poner término de inmediato a la autorización concedida, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo adeudado.

VIGÉSIMO CUARTO: Que en relación a las alegaciones de la demandada de que la acción de autos no tendría causa, por motivo de estar exonerada del pago de las tarifas al corresponder el período demandado a aquel que comprende el denominado estallido social y el posterior estado de excepción sanitario, además de alegar la nulidad de la demanda por no especificarse en el libelo pretensor las obras, autores, fechas y horas en que se habrían cometido las infracciones; cabe tener presente que por un lado, no se encuentra controvertido en autos, el que las partes suscribieron el contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales, de cuyo contenido en cuanto a la controversia de autos, se dejó constancia en el considerando que antecede.

Conforme a lo allí pactado, la demandada solicitó a la actora autorización para ejecutar públicamente obras musicales y fonogramas de su repertorio y esta última se la concedió, en tanto por concepto de autorización, la demandada se obligó a pagar la tarifa y con la vigencia pactadas, motivos por los cuales, nada debía acreditar la entidad demandante, y por el contrario era la demandada quien debía probar el haber cumplido con lo pactado en el contrato o la efectividad de encontrarse exonerada de pagar las tarifas acordadas por motivos de fuerza mayor, circunstancia que no efectuó, por cuanto la demandada ninguna prueba rindió en estos autos tendiente a acreditar la efectividad de sus asertos.

A mayor abundamiento, cabe considerar que ni la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, ni mucho menos el artículo 254 del



Código de Procedimiento Civil citado por la demandada, exigen para la procedencia de la demanda en esta materia que la actora especifique en su libelo las obras, autores, fechas y horas en que se habrían cometido las infracciones, por cuanto se tiene especialmente presente que la materia que se discute en autos es el no pago de la tarifa pactada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que así las cosas, acreditado el vínculo contractual entre las partes de este juicio, es que corresponde pronunciarse acerca del pago de lo debido, accediéndose a lo solicitado por la actora en cuanto a pagar la tarifa mensual pactada en el “Contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales” N°47651 y su Anexo de autorización para ejecutar fonogramas del repertorio de la SCD, ascendente a 1.60 U.M.M., más 50% de la tarifa por concepto de derechos conexos, respecto del período comprendido entre los meses de noviembre del 2019 y marzo del 2023, ambos inclusive, y que además se ordene pagar dicha tarifa por el período comprendido entre el día el 01 de abril del 2023 en adelante y hasta el término del juicio, petición a la que se accederá por no constar que la demandada haya cancelado la tarifa mensual a la que se obligó a pagar, en los términos pactados en el contrato.

VIGÉSIMO SEXTO: Que por otro lado, la demandante solicitó a título de indemnización de perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones reajustables, contado desde el décimo día del mes siguiente a cada período mensual adeudado hasta su pago efectivo, a lo que se accederá toda vez que fue pactado en la cláusula séptima del contrato, debiendo determinarse su valor al momento de liquidarse el crédito.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a la multa solicitada, ésta será desestimada, pues lo que existe no es una infracción a las normas sobre protección de la propiedad intelectual contempladas en la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, esto es, no existió una reproducción de alguna obra musical sin el permiso de su autor o de la



demandante, sino que solo existió un incumplimiento contractual, en cuyo evento la citada norma no dispone sanción alguna.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que atendido el mérito de los antecedentes, se condena en costas a la parte demandada, por haber sido vencida y no haber tenido motivo plausible para litigar.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la demás prueba rendida y no analizada pormenorizadamente, en nada alteran lo que se lleva razonado, por lo que se omite su análisis.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, artículos 1, 17 a 21, 67; artículos 1437, 1545, 1546 y 1698 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 N° 3 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley N° 17.336, y demás normas pertinentes, **SE RESUELVE:**

I. Que **se rechaza la excepción de incompetencia** del tribunal deducida por la demandada **KELE S.A.**, en contra de la **Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales**.

II. Que **se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva** deducida por la demandada **KELE S.A.**, en contra de la **Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales**.

III. Que **se rechaza la excepción de falta de legitimación activa** deducida por la demandada **KELE S.A.**, en contra de la **Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales**.

IV. Que **se acoge la demanda** incoada al folio 1, por la **Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales**, condenándose a la demandada **KELE S.A.**, representada individual e indistintamente por don Alberto Enrique Francisco Agostini Garibotto o doña Daniela Cecchi, a pagar la tarifa mensual pactada en el Contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales N°47651, y su respectivo Anexo para ejecutar públicamente los fonogramas del repertorio SCD, ascendente a la suma de 1,60 U.M.M.(uno coma sesenta unidades musicales mensuales) más el 50% de la tarifa por concepto de derechos conexos, por el período comprendido entre los



meses de noviembre del 2019 y marzo del 2023, ambos inclusive, más aquéllos comprendidos en el período que va entre el día el 01 de abril del 2023 y hasta el término del juicio, los que serán liquidados en la etapa de cumplimiento del fallo.

V. Que ***se condena a la demandada, a título de indemnización de perjuicios***, a pagar las sumas antes indicadas con el interés corriente bancario para operaciones reajustables, contado desde el décimo día del mes siguiente a cada período mensual adeudado hasta su pago efectivo

VI. Que en lo demás ***se desestima la demanda***.

VII. Que ***se condena en costas a la demandada***, según lo señalado en el motivo vigésimo octavo.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol: C-5.640 -2023

**Dictada por Doña Isabel Eyzaguirre Flores,
Jueza Titular.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro**

